

C.A. de Santiago

Santiago, dos de junio de dos mil veinticinco.

**Vistos:**

En los autos RUC N° 2300788465-6 y RIT N° 180-2024 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina, el tres de abril de dos mil veinticinco se dictó sentencia definitiva por la que se condenó a **YERI ANDRÉS PÉREZ REYES**, a sufrir la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales, como autor de un delito de robo con intimidación, en grado de frustrado, perpetrado en Tiltil el día 22 de julio de 2023.

En contra de la referida sentencia, la defensa del imputado dedujo recurso de nulidad, el que fue declarado admisible y se procedió a su conocimiento en la audiencia del 13 de mayo último, fijándose como fecha para la lectura de la sentencia el día de hoy.

**Y considerando:**

1º) El recurso de nulidad deducido se funda, de manera principal, en la causal del artículo 374 letra e), en relación a los artículos 342 letra c) y 297, todos del Código Procesal Penal, al vulnerar la sentencia de instancia el principio de la lógica de la razón suficiente en el establecimiento de los hechos.

Explica que el tribunal llega a la convicción condenatoria con las declaraciones entregadas por los testigos de oídas de los funcionarios de carabineros Mauricio Levimán y Camilo Flores, quienes en estrados señalaron lo declarado por la víctima el día de los hechos, sumado al testimonio del aprehensor civil Ángel Cruz.

Precisa que, en relación a la existencia de la intimidación, la sentencia contiene los siguientes errores lógicos: primero, no es posible dar por acreditados los hechos declarados por la víctima porque ésta no declaró en el juicio oral, sin que sirva para corroborar su versión la declaración de los funcionarios de carabineros, al tratarse de testigos de oídas; segundo, la circunstancia establecida de que la víctima fue “apuntada con un arma”, carece de razón suficiente, por cuanto el carabinero Levimán refirió en un primer momento que la víctima fue apuntada con un arma, pero después indica que al sujeto se le cayó el arma (y que luego la empuja y va hacia la caja), mientras que el funcionario Flores nunca habla de haber sido



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CSPFXVJGEXJ

“apuntada”, sino que expresa que fue “intimidada”; tercero, ya que no hay información sobre cómo la víctima fue apuntada con el arma, ni en qué parte del cuerpo, tampoco cómo fue intimidada; y, cuarto, el hallazgo del arma en el local no permite concluir la existencia de la intimidación, lo que se apartaría de un razonamiento lógico, pues ello no es una razón suficiente para acreditar la existencia de una intimidación.

En cuanto la sentencia establece que el objeto utilizado por el imputado fue un “arma aparentemente de fuego”, afirma que no es posible llegar a esa conclusión, porque el carabinero Levimán dijo que la víctima fue apuntada con un arma que resultó ser de juguete y aclaró que dicha circunstancia fue determinada con posterioridad; el funcionario Flores expresó que fue intimidada con un arma de juguete y luego aclara que el testigo Cruz explica que era de juguete; mientras este último testigo señala que el sujeto tenía una pistola plástica.

Al finalizar esta causal pide que se anule el juicio oral y la sentencia condenatoria, ordenándose la realización de un nuevo juicio oral por tribunal no inhabilitado.

2º) En subsidio de la anterior, formula la causal de nulidad prevista en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, toda vez que la sentencia ha aplicado erróneamente lo dispuesto en el artículo 104 del Código Penal en relación con el artículo 12 N° 16 del mismo cuerpo legal, por cuanto el imputado fue condenado con anterioridad por el delito de robo con violencia cometido el 10 de noviembre de 2017, a una pena de cuatro años de privación de libertad y, por ende, de simple delito, por lo que el plazo a considerar para la aplicación del citado artículo 104 es de cinco años, y no de diez como lo resuelve la sentencia impugnada, debiendo entonces ser desestimada la agravante de reincidencia.

En virtud de esta causal solicita que se anule la sentencia condenatoria, ordenándose la dictación de una de reemplazo que imponga la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo.

3º) La sentencia impugnada, en su motivo 5º da por acreditados los siguientes hechos:

“[...] el día 22 de julio de 2023, aproximadamente a las 4 horas, el acusado ingresó al local Punto Copec, ubicado en calle Arturo Prat 05 comuna de Tiltil, amenazó a la cajera Deiby con un arma que aparentaba ser de fuego, procediendo a empujarla y abrir la caja registradora, desde donde



sustraigo la suma de 30.000, no pudiendo consumir el ilícito toda vez que fue detenido por un bombero de la estación, al interior del local”.

Estos hechos fueron calificados como delito de robo con intimidación, previsto y sancionado en el artículo 436, inciso primero, del Código Penal, y se atribuye participación al acusado como autor.

4º) Para resolver adecuadamente lo planteado mediante la causal principal del arbitrio de la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, conviene recordar que el principio de razón suficiente cuya infracción se denuncia, en su formulación lógica, puede expresarse como “*todo juicio, para ser verdadero, ha de menester de una razón suficiente*”. Este principio nos indica que para que un enunciado pueda ser verdadero ha de menester “[...] elementos objetivos que basten para poder afirmar tal juicio como verdadero.” (Maturana, J. *Sana Crítica. Un sistema de valoración racional de la prueba*, pp. 247 y 250).

El examen de la observancia de este principio debe mantenerse dentro del ámbito en el que el mismo opera, esto es, el de *la valoración de la prueba*, sin que quepa extender su aplicación a la fase posterior de *decisión de la prueba*, en la que se efectúa un pronunciamiento sobre si los elementos de juicio otorgan corroboración suficiente a los enunciados fácticos que comprende la acusación, como para afirmar que se alcanzó el estándar de prueba fijado legalmente, que en el proceso penal corresponde al de convicción más allá de toda duda razonable.

Tener en vista la distinción anterior en el examen que se realizará a continuación es capital, sobre todo tratándose del principio de razón suficiente, toda vez que éste “[...] no es exclusivamente un principio lógico, al referirse demasiado concretamente al fondo de las premisas y al exigir investigar el fundamento material de lo enunciado (la prueba). Por ello, hay que ser cuidadosos en su aplicación y limitarse a exigir una ‘mínima actividad probatoria’ que pueda bastar para fundamentar la verdad de un enunciado. No se debe exigir una fundamentación completa que cumpla los más altos estándares de prueba (‘máxima actividad probatoria’), pues con ello nos apartaríamos del principio lógico para adentrarnos en los dominios del principio epistemológico y ontológico de razón suficiente” (Maturana, *ob. cit.*, p. 250).



5°) Efectuadas las aclaraciones indispensables, sigue el examen de los motivos del recurso, el que cuestiona –aunque en otro orden– el establecimiento como hecho demostrado, que el objeto utilizado por el imputado fue “*un arma que aparentaba ser de fuego*”.

Al respecto la sentencia en su motivo 5° indica que “*la declaración de los testigos*” dio cuenta del “[...] amedrentamiento que sufrió una dependiente por el sujeto que la conminó, mediante amenaza con un artefacto con apariencia de arma de fuego, a la entrega del dinero recaudado de las ventas del local comercial” y, efectivamente, tales circunstancias son reseñadas por los carabineros Mauricio Leviman Hunuche, a quien se le exhibe una fotografía del objeto –imagen también mostrada al tribunal– y relata que sólo se determinó que era un arma de juguete al tomarla del mesón del local; y Camilo Flores Carrasco, que entrevista a la dependiente, la que le expresa que no pudo diferenciar el objeto de un arma verdadera.

Esas declaraciones constituyen suficientes elementos objetivos para afirmar que el objeto utilizado por el imputado para amenazar a la víctima tenía apariencia de un arma de fuego, pues como dijeron los testigos aludidos, que no lo era realmente sólo se advierte al tomarla, y una persona sin conocimientos especiales –como la víctima– no pudo diferenciarla de un arma de juguete.

Lo dicho basta para descartar este primer fundamento en que se ampara la denuncia de infracción al principio de razón suficiente que denuncia el recurso.

6°) En lo tocante a la existencia de la intimidación, la que como se mencionó antes, se efectúa con el uso de un arma que aparentaba ser de fuego, la sentencia lo establece con la declaración de los tres testigos que deponen en el juicio –los dos funcionarios policiales que participan en el procedimiento de detención y otro dependiente que retiene al imputado hasta la llegada de aquéllos–, los tres contestes en que la víctima refiere que el imputado le exhibe el arma y que esa arma es portada por el imputado en el establecimiento, lugar desde donde la recogen los policías.

Engarzado a lo que se viene razonando, no es efectivo que la versión de la víctima entregada a los policías no cuente con corroboración, porque el uso del arma aparentemente de fuego para su intimidación que relata, es consistente con la conducta que ella adopta y que aprecia directamente el testigo Ángel Cruz González, quien acude en su auxilio precisamente al



escuchar sus gritos, y presencia, al ingresar al local, que ella le pedía al imputado que no la agrediera, testigo que además ve cuando cae el arma de las vestimentas del acusado al forcejear posteriormente con éste, objeto que luego es recogido por los policías, y exhibida su fotografía al tribunal de la instancia.

En cuanto al uso del arma aparentemente de fuego como medio para intimidar a la víctima, la sentencia lo sienta con la prueba ya descrita, desde que la testimonial que pondera claramente expresa que ese arma le fue exhibida por el imputado, resultando entonces absolutamente irrelevante si ese uso consistió exactamente en “apuntar” a la víctima, y menos determinar a qué parte del cuerpo la apuntó, circunstancia que ni siquiera es mencionada en los hechos establecidos en la sentencia en examen, pues la mera exhibición de su porte a quien creía que se trataba de un arma de fuego real –o al menos no podía descartarlo–, en el marco de un intento de apropiación violenta de bienes ajenos, es suficiente para configurar el elemento de intimidación del tipo penal materia de la condena.

7°) Así, la sentencia se basa en una serie de elementos objetivos que racionalmente bastan para sustentar el uso del arma que aparentaba ser de fuego contra la víctima y que conduce, igualmente, ha desestimar la infracción del principio de razón suficiente por este segundo motivo.

En resumen y conclusión, no constatándose ninguna de las contradicciones ni omisiones en la que sustenta el recurso la supuesta infracción del principio de razón suficiente, no se presenta en la especie la causal principal de nulidad de la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, y por consiguiente será desestimada.

8°) En lo concerniente a la causal subsidiaria de la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, el artículo 104 del Código Penal dispone “[l]as circunstancias agravantes comprendidas en los núms. 15 y 16 del art. 12, no se tomarán en cuenta tratándose de crímenes, después de diez años, a contar desde la fecha en que tuvo lugar el hecho, ni después de cinco, en los casos de simples delitos”.

El artículo 3° del mismo código señala que “[l]os delitos, atendida su gravedad, se dividen en crímenes, simples delitos y faltas y se califican de tales según la pena que les está asignada en la escala general del art. 21”.

El mencionado artículo 21 establece una escala general que ordena las penas conforme a su gravedad y permite clasificar los delitos en crímenes,



simples delitos y faltas, “[...] según las penas que se les asigna en abstracto, en concordancia con los Arts. 3° y 4°” (Cillero, M., “Comentario”, en Couso, J. y Hernández, H. (coord.) *Código Penal Comentado*, p. 452). En el mismo sentido se ha dicho que el citado artículo clasifica las infracciones criminales atendiendo a la gravedad de la pena “[...] asignada por la ley para el autor del delito consumado, esto es, en abstracto, sin considerar la pena aplicable en cada caso particular” (Politoff, S. y Matus, J. P., “1. De las penas en general”, en Politoff, S. y Ortiz, L. (dir.) *Texto y Comentario del Código Penal Chileno*, p. 273).

Pues bien, el artículo 21 clasifica como pena de crimen la de “*presidio mayor*” y, dado que el delito de robo con intimidación tiene asignada en el inciso primero del artículo 436 del Código Penal la pena de “*presidio mayor en sus grados mínimo a máximo*”, ésta corresponde a una de crimen y, por consiguiente, según el citado artículo 3° tal tipo de robo debe ser calificado como crimen para efectos de la aplicación del artículo 104 en estudio.

9°) No hay elementos interpretativos que conduzcan a entender que el artículo 104 en examen alude a la pena “en concreto” fijada en la sentencia definitiva luego de aplicadas las normas de determinación legal y judicial, pues dicha norma no se refiere a delitos que fueron *sancionados con pena* de crimen o simple delito, o a cuyos autores *se impuso* una pena de crimen o simple delito, sino únicamente repara en si el hecho cometido antes *se trata* –dice “*tratándose*”– de crimen o simple delito y, si se trata de uno u otro, como se dijo, el mencionado artículo 3° en relación al artículo 21 lo dirime según la sanción “*en abstracto*” prevista en el Código Penal o en la ley especial respectiva.

10°) A mayor abundamiento, seguir la tesis propuesta por el recurrente importaría que quien fue sancionado con una pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo y se halla privado de libertad desde el día del ilícito, que tiene asignada en la ley una pena de crimen –como presidio mayor–, si comete un nuevo delito al día siguiente de cumplir su pena y recuperar su libertad, la sanción de este último no se vería agravada en virtud de la circunstancia modificatoria en estudio, sin tampoco poder ser sopesada por vía del artículo 69 del Código Penal en la fijación de la cuantía de la pena.



Tal postulado se aparta notoriamente de una interpretación sistemática del ordenamiento legal, cuyas reformas se han orientado nítidamente a incrementar la relevancia y significación de la circunstancia en comento, como se desprende de las importantes restricciones que su reconocimiento conlleva para la determinación de la pena, como las regladas en el artículo 68 ter del Código Penal por la Ley N° 21.694 de 4 de septiembre de 2024, y antes en el artículo 449 N° 2 del mismo código por la Ley N° 20.931 de 5 de julio de 2016.

11°) Por tanto, habiendo resuelto la sentencia en estudio que el delito por el que fue sancionado anteriormente el acusado constituye un crimen para efectos de lo reglado en el artículo 104 del Código Penal, y no habiendo pasado más de 10 años desde su comisión hasta la perpetración del delito que nos ocupa, no se ha cometido error de derecho al aplicar la agravante de reincidencia del artículo 12 N° 16 del mismo código, lo que conduce necesariamente a desestimar igualmente la causal subsidiaria del recurso.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad interpuesto en favor de YERI ANDRÉS PÉREZ REYES en contra de la sentencia dictada el tres de abril de dos mil veinticinco, por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina, en la causa RUC N° 2300788465-6 y RIT N° 180-2024, y contra el juicio que le antecedió, los que, por ende, no son nulos.

Redactó el ministro suplente Manuel Rodríguez Vega.

Regístrese y comuníquese.

**Rol Nro. 1969-2025 (Penal).**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CSPFXVJGEXJ

Pronunciado por la Undécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Romy Grace Rutherford P., Ministro Suplente Manuel Esteban Rodríguez V. y Abogado Integrante Renee Rivero H. Santiago, dos de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a dos de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CSPFXVJGEXJ